

Advance Edited Version

Distr.
GENERAL

A/HRC/13/26/Add.2
18 de marzo de 2010

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
13° período de sesiones
Tema 2 de la agenda

INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL

Adición

**Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre las actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia * ****

* Este informe se presenta con retraso para poder incluir en él la información más reciente.

** El resumen del presente informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo, se distribuye en inglés y en español solamente.

Resumen

Conforme al mandato establecido en el acuerdo suscrito en 2007 entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el presente informe ofrece una descripción de la situación de los derechos humanos en Bolivia y de las actividades de la oficina del Alto Comisionado en el país durante 2009. Se concluye con una serie de recomendaciones.

Entre los acontecimientos importantes de 2009, se incluye la adopción de una nueva Constitución, el 25 de enero, y la celebración de elecciones generales, el 6 de diciembre. En general, ambos eventos se desarrollaron de manera pacífica y respetuosa con una elevada participación del electorado. El Presidente Morales fue reelecto con el 64% de los votos y el Movimiento al Socialismo ganó dos tercios de los puestos en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con la adopción de la nueva Constitución, los derechos de los pueblos indígenas han alcanzado nuevos niveles de reconocimiento. Los derechos económicos, sociales y culturales están reflejados prominentemente en la nueva Constitución, mientras que el Gobierno ha estado implementando medidas adicionales en este ámbito dirigidas, por ejemplo, a reducir la mortalidad materna e infantil. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, todavía los pueblos indígenas continúan enfrentando condiciones de vida sociales y económicas adversas y algunos siguen sometidos a la servidumbre y al trabajo forzoso. La Conferencia de Examen de Durban fomentó los esfuerzos para combatir el racismo y la discriminación, contribuyendo a introducir el tema en la agenda nacional. Sin embargo, la necesidad de desarrollo legislativo y fortalecimiento institucional sigue siendo significativa.

En la lucha contra la impunidad, la búsqueda de los restos de las personas desaparecidas durante las dictaduras militares; la apertura del juicio oral contra el ex Presidente Sánchez de Lozada y otros; y el inicio del pago de reparaciones a las víctimas de ese caso constituyeron avances significativos. Todavía es necesario mayor progreso en el otorgamiento de una efectiva reparación a las víctimas de otras violaciones a los derechos humanos. También es destacable el avance en las investigaciones de la masacre de Pando de septiembre de 2008 y de los incidentes racistas de Sucre de mayo de 2008. Pero al mismo tiempo, el sistema judicial continúa experimentando una profunda

crisis institucional en medio de la división política entre el Gobierno y la oposición, mientras que el fracaso para llenar las vacancias de los puestos jerárquicos judiciales continúa paralizando al Tribunal Constitucional.

La oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia observó eventos relacionados con los derechos humanos en varios departamentos del país. Particular atención se prestó a los desarrollos judiciales en casos emblemáticos de derechos humanos; a ataques contra la libertad de expresión y contra los defensores de derechos humanos; así como a cuestiones relacionadas con derechos humanos durante el referéndum nacional y las elecciones generales.

Se logró algún progreso en la implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, adoptado en 2008, incluyendo la instalación del Consejo Nacional de Derechos Humanos y los esfuerzos para combatir el racismo y la discriminación. El gobierno y la sociedad civil participaron activamente en varias consultas preparatorias para el Examen Periódico Universal, al que Bolivia se presentará en febrero de 2010. El proceso fue inclusivo y actores relevantes presentaron sus informes.

Anexo

**INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS ACTIVIDADES
DE SU OFICINA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**

ÍNDICE

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. INTRODUCCIÓN.....	1-2	
II. CONTEXTO NACIONAL.....	3-11	
III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.....	12-90	
A. Derechos humanos de los pueblos indígenas.....	12-19	
B. Racismo, discriminación e intolerancia.....	20-27	
C. Estado de derecho: administración de justicia y lucha contra la impunidad	28-57	
D. Seguridad y derechos humanos.....	58-68	
E. Derechos políticos.....	69-72	
F. Libertad de expresión y opinión.....	73-79	
G. Derechos económicos, sociales y culturales.....	80-87	
H. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.....	88-90	
IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.....	91-102	
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	103-120	

I. INTRODUCCIÓN

1. La oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue establecida por un acuerdo firmado en febrero de 2007 entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Bolivia. El acuerdo, que fue aprobado por el Congreso el 13 de julio de 2007, confiere a la oficina en Bolivia un mandato amplio que comprende, *inter alia*, el otorgamiento de asistencia técnica a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil; la promoción de los derechos humanos; y el monitoreo y elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.

2. Conforme al mandato de la oficina en Bolivia, el presente informe ofrece una descripción general de la situación de los derechos humanos en Bolivia, destacando los principales logros y preocupaciones en 2009. Asimismo, destaca las principales actividades de la oficina durante este período, y formula una serie de recomendaciones.

II. CONTEXTO NACIONAL

3. El 25 de enero de 2009, por primera vez en la historia boliviana, se celebró un referéndum para la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado (en adelante NCPE), y para decidir sobre la máxima extensión de tierra que constitucionalmente puede poseer una persona. La NCPE fue aprobada por el 61,43% de los votantes, mientras el 80,65% votó por un límite de propiedad de la tierra de 5.000 hectáreas. En general, la votación se desarrolló en una atmósfera pacífica y democrática, con elevada participación del electorado.

4. Promulgada el 7 de febrero, la NCPE representa un avance significativo al incluir una vasta lista de derechos, reconociendo expresamente casi todos aquellos incluidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, e incorporando plenamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo aquellos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. La NCPE otorga jerarquía normativa supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos e incorpora garantías adicionales de protección. Los derechos de las mujeres están reconocidos a través de varios artículos de la Constitución y la cláusula de no discriminación

contiene un gran número de causales. Pese al reconocimiento de todas las garantías del debido proceso, la principal preocupación de la oficina en Bolivia en relación con la Constitución se refiere a la aplicación retroactiva de la ley penal en los casos de corrupción.

5. Se observaron cierto número de incidentes poco después de la adopción de la NCPE, disímiles interpretaciones sobre algunas de sus normas dieron lugar a un número de incidentes. En un caso, la Central Obrera Regional de El Alto, en errónea aplicación del control social previsto en la NCPE, solicitó informes financieros a varias ONG para conocer la procedencia de sus fondos. En otro caso, hubo un acto de avasallamiento de una propiedad de un ex Vicepresidente por un grupo de miembros de la comunidad. Problemas de esta naturaleza mostraron la necesidad de contar prontamente con la legislación complementaria de la NCPE.

6. La aprobación en abril de la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio convocando a elecciones generales para el 6 de diciembre de 2009, estuvo precedida de intensas negociaciones entre el Gobierno y la oposición. El Presidente Morales se declaró en huelga de hambre para asegurar la pronta adopción de la ley. La ley estableció la creación de un nuevo registro electoral con la incorporación de datos biométricos de los electores y permitió votar a un número reducido de bolivianos residentes en otros cuatro países en el exterior. También reconoció siete circunscripciones electorales indígenas, que las organizaciones indígenas consideraron insuficientes.

7. Más de 5.100.000 personas en Bolivia y en el exterior fueron registradas en el nuevo padrón electoral. El Presidente Morales fue reelegido con el 64% de los votos y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), obtuvo dos tercios de los miembros en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.

8. En forma paralela a las elecciones de diciembre, también se llevaron a cabo referéndums sobre autonomía departamental, regional e indígena. La autonomía departamental fue aprobada en los cinco departamentos consultados (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí). La región del Gran Chaco también votó por su autonomía y 11 de 12 municipios votaron a favor de la autonomía indígena. Esto representó un paso adelante en la construcción del nuevo modelo de autonomías previsto en la NCPE.

9. Si bien no se reprodujeron los escenarios de violencia y la actividad de grupos de choque del año anterior, persistió la marcada división política entre el Gobierno y la oposición.
10. Tras los atentados explosivos producidos en la ciudad de Santa Cruz, se realizó en abril un operativo policial en un hotel de esa ciudad, con el principal objetivo de desmantelar a un supuesto grupo terrorista, y en el que tres personas resultaron muertas y dos aprehendidas. Otros atentados explosivos en La Paz también causaron gran alarma en la población.
11. Finalmente, en medio de una continua división política entre el Gobierno y grupos de oposición, el ya debilitado y politizado sistema de justicia se mostró más vulnerable al factor político, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales. El número de vacantes en niveles jerárquicos de la judicatura continuó incrementándose, socavando seriamente su trabajo, particularmente el del Tribunal Constitucional.

III. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Derechos humanos de los pueblos indígenas¹

12. La NCPE establece mejores garantías para la protección de los derechos de los pueblos indígenas (referidos como “pueblos indígena originario campesinos”) y para encontrar nuevas vías para reconciliar las demandas individuales y colectivas de los bolivianos. Varias medidas políticas, económicas, sociales y culturales han sido tomadas para superar la exclusión histórica sufrida por los pueblos indígenas. Importantes disposiciones en la NCPE están relacionadas con el derecho a la consulta, la distribución y propiedad de la tierra, la autonomía indígena y el sistema de justicia indígena. Su aplicación será un reto significativo.
13. El derecho a la consulta de los pueblos indígenas estuvo primeramente contemplado en la Ley de Hidrocarburos 3058 de 2005 y en los subsecuentes Decretos Supremos 29033 (2007) y 29574 (2008), que establecían procedimientos de consulta en relación con la extracción de petróleo y gas natural en propiedades comunitarias, incluyendo Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Estas

¹ De acuerdo al censo del año 2000, el 62% de la población boliviana mayor de 15 años se identifica con uno de los 36 pueblos indígenas que habitan el país.

normas serán más efectivas ahora que el derecho a la consulta está constitucionalmente garantizado. Con todo, ninguna regulación específica ha sido adoptada en relación a la minería y a proyectos de construcción de envergadura. Sin embargo, ningún proyecto extractivo puede iniciarse sin un previo estudio social y de impacto ambiental. Varios grupos indígenas han reclamado, no obstante, por el hecho de que no existe una implementación sistemática de consulta y porque decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo en materia caminera y energética han sido adoptadas sin consulta ni con el consentimiento de los pueblos indígenas.

14. El reconocimiento legal de los derechos individuales y colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas es esencial para garantizar su subsistencia y sus formas tradicionales de desarrollo. La NCPE específicamente reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función económica y social (art. 393). Desde 2006, el Instituto Nacional de Reforma Agraria y el Viceministerio de Tierras reportaron la entrega de títulos de propiedad de cerca de 26 millones de hectáreas (4.476.115 en 2009).

15. El reconocimiento constitucional de los sistemas de justicia indígena originaria campesina (a los que les fue acordada la misma jerarquía que la justicia ordinaria) ha significado un nuevo paso para garantizar el derecho de acceso a la justicia y los derechos de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, abrió un debate sobre cómo desarrollar los dos sistemas de justicia, estableciendo sus respectivos ámbitos de aplicación de conformidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La mayoría de las organizaciones indígenas han anunciado su intención de desarrollar sus sistemas de justicia utilizando el derecho internacional de los derechos humanos como referencia. Sin embargo, el debate sobre la justicia indígena se intensificó luego de la ocurrencia de un notorio caso en mayo de 2009, en el cual las autoridades indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS) aplicaron un castigo corporal a un ex líder indígena en el marco de la justicia indígena. La Ministra de Justicia condenó el hecho.

16. La Ley del Régimen Electoral Transitorio creó siete circunscripciones especiales indígenas y, por primera vez, los pueblos indígenas tienen una representación directa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reemplazó al Congreso Nacional. Doce municipalidades en cinco departamentos fueron autorizadas para celebrar referéndums sobre autonomía indígena el 6 de

diciembre, de las cuales 11 votaron a favor de ella. Los líderes indígenas, no obstante, consideran que el actual número de circunscripciones electorales no da a los pueblos indígenas suficiente representación en la Asamblea y esperan que la nueva ley electoral, a ser adoptada en 2010, proponga un sistema de representación más justo.

17. El pueblo guaraní, localizado en la región del Chaco, ha estado buscando reconstituir sus organizaciones territoriales, así como sus sistemas de autoridades e identidad cultural. Pero esta iniciativa está siendo obstaculizada por el hecho de que muchas familias y comunidades continúan siendo sometidas a servidumbre y trabajo forzoso. Esta situación fue comprobada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas durante su visita a Bolivia entre el 30 de abril y el 6 de mayo. El Foro Permanente concluyó en que se requiere la participación directa de los afectados y también el necesario concurso de las autoridades relevantes de los niveles nacional, departamental y municipal para superar este serio problema.

18. La libertad de asociación de los guaraníes también ha estado comprometida debido a que ciertos hacendados y autoridades locales amenazaron e impidieron realizar reuniones a comunidades y líderes guaraníes. Maestros también fueron impedidos de realizar actividades educativas con niños guaraníes. También constituye una seria preocupación los testimonios ante el Foro Permanente sobre abuso sexual por parte de hacendados y su personal a niñas guaraníes, que supuestamente fueron separadas de sus familias para trabajar como sirvientas en las zonas urbanas.

19. Aunque el pueblo guaraní ha estado elaborando un plan de desarrollo integral, el apoyo del Gobierno debe continuar hasta su elaboración final e implementación. Los intentos anteriores de avanzar en la dirección de dicho plan aún no han dado resultados.

B. Racismo, discriminación e intolerancia

20. El racismo, la discriminación y la intolerancia persisten y, a menudo, se expresan abiertamente. Aunque las expresiones de racismo fueron menos violentas que en 2008, la discriminación racial contra los bolivianos de origen indígena y de origen afro sigue siendo una de las formas más comunes de discriminación. De particular preocupación es la situación de invisibilidad y exclusión social en que viven las comunidades afrobolivianas.

21. Las autoridades dieron pasos concretos para eliminar prácticas e ideologías discriminatorias prevalentes con la creación, en febrero de 2009, del Viceministerio de Descolonización, dentro del Ministerio de Culturas, y de una Dirección General de Lucha contra el Racismo. Además de varias actividades de concienciación, el Viceministerio y la Dirección General trabajaron en la redacción de nueva legislación para combatir la discriminación racial (actualmente en consideración del Órgano Legislativo).

22. La Conferencia de Examen de Durban contribuyó a poner en la agenda nacional la lucha contra el racismo y la discriminación en Bolivia. El Ministerio de Justicia se comprometió a dar seguimiento a las recomendaciones de la conferencia y organizar varios seminarios sobre el tema. Grupos de la sociedad civil comprometidos en la lucha contra el racismo también organizaron actividades de concienciación.

23. Se realizaron esfuerzos de reparación para las víctimas de la seria violencia racial vivida en Sucre el 24 de mayo de 2008². Por ejemplo, el Decreto Supremo 131 declaró al 24 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados publicó un informe con sus conclusiones sobre dichos incidentes³.

24. A pesar de algunas iniciativas del Gobierno, Bolivia aún no ha adoptado una legislación que criminalice la discriminación racial, como fue sugerido en varias ocasiones desde 1972 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

25. Con relación a otras formas de discriminación, la violencia contra la mujer continúa siendo generalizada, aunque se aprobaron leyes contra la violencia doméstica (Ley 1674 de 1995) y de protección a las víctimas de la violencia sexual (Ley 2033 de 1999). Las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres han señalado, por ejemplo, que sólo el 11% de los casos de violencia son tratados en los juzgados de familia y que el 70% de las denuncias son abandonadas antes de ser juzgadas.

² Véase A/HRC/10/31/Add.2, párrs. 18 a 20.

³ Sobre los desarrollos procesales en este caso, véase la sección C *infra*.

26. Las normas y políticas antidiscriminación adoptadas en 2009 incluyen, entre otras, el Decreto Supremo 213 contra la discriminación en los procesos de reclutamiento laboral; el Decreto Supremo 264 que declara el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores y amplía el régimen de descuentos y privilegios para esta población; y el Decreto Supremo 189 que declara el 28 de junio como Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa.

27. Bolivia ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, sin embargo, la situación de las personas con discapacidad sigue siendo preocupante. En agosto, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 256 que reglamenta transitoriamente el uso de más de 5 millones de dólares de los Estados Unidos de América en 10 programas a ser implementados en 2009 a favor de las personas con discapacidad. Varias organizaciones realizaron protestas objetando la medida aduciendo que no fueron debidamente consultadas en el diseño de los programas y que el decreto fue expedido demasiado tarde en el año para que tenga una efectiva implementación.

C. Estado de derecho: administración de justicia y lucha contra la impunidad

28. La oficina en Bolivia hizo seguimiento de la administración de justicia, que continúa sumida en una profunda crisis estructural y de larga data. También hizo seguimiento al desarrollo de casos paradigmáticos de derechos humanos. Como resultado de presiones regionales, políticas y económicas, el sistema de justicia continua sufriendo del tráfico de influencias, corrupción y falta de independencia, lo que, en conjunto, afecta al acceso a la justicia, debilita el estado de derecho y contribuye a la impunidad.

29. Se dieron avances significativos en materia de lucha contra la impunidad, aunque las debilidades que aquejan al sistema de justicia continúan teniendo un impacto considerable.

1. Cargos vacantes en el sistema judicial e independencia de los abogados

30. El hecho de que el Tribunal Constitucional no haya funcionado por los últimos dos años es una gran preocupación. Su última magistrada renunció en mayo de 2009, dejando una carga procesal de 5.397 expedientes que afectan a 34.096 litigantes.

31. La Corte Suprema de Justicia, que debería estar integrada por 12 ministros, quedó reducida a seis luego de que su presidente fuera suspendido por una acusación de retardación de justicia y otra magistrada por una acusación de prevaricato. Los juicios en contra de estos magistrados aún no habían comenzado al final de 2009. Con relación al caso contra el presidente de la Corte, el juicio a cargo del Senado no pudo iniciarse por varias razones, entre otras por las recusaciones planteadas por ambas partes contra miembros del Senado que conforman el tribunal de sentencia y por una serie de incidentes procesales. Ambos acusados alegaron que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados, en particular, su derecho al debido proceso.

32. El Consejo de la Judicatura tampoco pudo llenar sus tres vacancias, por lo que operó con un solo miembro. Consecuentemente, varios cargos de jueces en todo el país no pudieron ser cubiertos.

33. En julio, el Presidente convocó a una cumbre de los órganos del Estado para tratar, *inter alia*, el tema de la designación de altas autoridades judiciales. Hasta el momento no se encontró ninguna solución. Salvo esta iniciativa, la oficina en Bolivia no percibió voluntad política por parte de ninguna de las fuerzas políticas para alcanzar consenso sobre cómo cubrir los cargos vacantes.

34. El 29 de abril de 2009, el Decreto Supremo 100 creó el Registro Público de Abogados a cargo del Ministerio de Justicia, confiriéndole facultades para procesar a estos profesionales por faltas éticas. Una de las justificaciones del decreto fue que los colegios de abogados imponían altos costos de inscripción, mientras que el registro en el Ministerio de Justicia sería gratuito, facilitando acceso a la profesión. Los colegios de abogados objetaron, alegando que el decreto constituía una indebida interferencia del Gobierno que podría provocar su debilitamiento institucional y económico. A pesar de sus aspectos positivos, el decreto podría tener implicaciones negativas en la independencia de los abogados, como lo señalan los estándares internacionales⁴ relevantes en la materia.

2. Investigaciones sobre la masacre de Pando

35. En marzo de 2009, la oficina en Bolivia publicó un informe sobre los hechos de violencia del 11 de septiembre de 2008 en Pando, donde murieron al menos 11 personas y otras 50 fueron

⁴ Véase las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre Belarús CCPR/C/79/Add.86, párr. 14.

heridas; la mayoría de las víctimas eran personas de origen indígena. La oficina en Bolivia concluyó que esta masacre constituyó una grave violación de los derechos humanos, presuntamente cometida por funcionarios de la Prefectura de Pando y del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la Prefectura. La oficina en Bolivia recomendó que la investigación y esclarecimiento judicial de estos hechos fueran conducidos con estricto apego a los principios procesales y sin dilaciones indebidas.

36. El problema medular en este proceso se dio respecto a la competencia jurisdiccional. La decisión de 10 de septiembre de la Corte Suprema de Justicia resolvió la disputa en favor de la jurisdicción ordinaria.

37. El 1º de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial legislativa investida de facultades para investigar los hechos de la masacre de Pando. El 12 de octubre, el Ministerio Público acusó a Leopoldo Fernández, ex Prefecto de Pando, y 26 personas más por los delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, asociación delictuosa y lesiones. El tribunal de sentencia para el juicio oral, que se sustanciará en La Paz, fue sorteado el 27 de octubre, pero luego fue recusado por los acusados. Hasta finales de 2009 el juicio no se había iniciado.

38. El proceso se dilató de forma innecesaria debido a numerosos recursos procesales, recusaciones y acciones penales o disciplinarias contra jueces, magistrados o fiscales interpuestos por todas las partes. Como resultado, el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación se vio postergado. Asimismo, se vio afectado el derecho de algunos de los imputados detenidos preventivamente a preparar su defensa con la debida anticipación.

39. Pese a estas dilaciones, la oficina en Bolivia considera que la presentación del informe de la Comisión Especial y de la acusación del Ministerio Público constituyen avances en este caso. Sin embargo, continúa aún la disputa sobre competencia territorial entre los distritos judiciales de Pando y La Paz. Más aún, la defensa del Sr. Fernández planteó acciones legales relacionadas con la competencia jurisdiccional.

40. Otro aspecto positivo fue la decisión del juzgado de El Porvenir en junio de 2009, disponiendo el sobreseimiento en el caso de los 16 campesinos que el 11 de septiembre de 2008

fueron agredidos y torturados por los partidarios de la Prefectura de Pando, y, luego, sometidos injustamente a una investigación penal como presuntos responsables de las muertes ocurridas aquel día.

3. Investigaciones sobre los incidentes racistas del 24 de mayo de 2008 en Sucre

41. El 24 de mayo de 2008 en Sucre, alrededor de 60 personas indígenas fueron objeto de abusos racistas y violencia física⁵. La investigación continúa en la mayoría de los casos relacionados con estos incidentes, y la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca reabrió tres de los casos inicialmente archivados y presentó cargos en otros dos casos. Sin embargo, ninguna de las imputaciones incluye el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La falta de penalización de la discriminación racial ha impedido un procesamiento penal por esta causal.

42. El 23 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó el informe final de investigación sobre los hechos ocurridos en Sucre, concluyendo que las acciones racistas fueron planificadas, organizadas y ejecutadas por 45 personas, entre ellas la actual prefecta de Chuquisaca, la ex alcaldesa de Sucre, varios parlamentarios de oposición y miembros del Comité Interinstitucional. La Comisión señaló que estas personas cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos y que debían ser imputadas penalmente o al menos investigadas por el Ministerio Público. También solicitó que se abra una investigación penal contra varios medios de comunicación de Sucre, la Unión Juvenil Cruceñista y dos hospitales de Sucre.

43. Después de la publicación del informe de la Comisión, la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca amplió la investigación imputando a las autoridades locales antes mencionadas. Además, se abrieron nuevos casos contra los medios locales de comunicación por los delitos de incitación pública a delinquir y apología del delito; contra el personal de dos hospitales por el incumplimiento del deber de diligencia y contra la Unión Juvenil Cruceñista por los delitos de sedición, desórdenes públicos, asociación criminal y varios delitos más. El mayor reto ahora será el de proseguir la investigación con la debida celeridad e imparcialidad.

⁵ Para mayor información véase A/HRC/10/31/Add.2, párrs. 18 a 20.

44. Hasta la fecha no ha habido investigaciones administrativas sobre el rol jugado por las fuerzas de seguridad o su falta de acción durante estos incidentes.

4. Juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada

45. En septiembre y octubre de 2003, protestas masivas fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad dejando como saldo la muerte de 67 personas y más de 400 heridos, el mayor número de víctimas de violencia política registradas en plena era democrática.

46. El 18 de mayo de 2009, luego de más de cinco años de trámites legales, la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 11 miembros de su gabinete y 5 miembros de su Alto Mando Militar, acusados de haber cometido nueve crímenes, incluyendo masacre, homicidio y torturas en relación con los incidentes de 2003.

47. El juicio pudo proseguir solamente contra dos ex ministros y los cinco miembros del Alto Mando Militar de 2003, ya que los otros 10 acusados dejaron el país y fueron declarados rebeldes⁶. El Sr. Sánchez de Lozada y algunos miembros de su gabinete huyeron a los Estados Unidos en 2003. Otros dejaron Bolivia en 2009 y algunos recibieron asilo político en Perú. Pese a las gestiones realizadas por el Gobierno, los trámites de extradición ante los Estados Unidos no prosperaron durante 2009, mientras que los procedimientos de extradición ante Perú recién se iniciaron al final del año. El juicio continuaba su desarrollo al cierre del año, aunque no exento de incidentes que pusieron en riesgo su continuidad.

48. Este caso es visto por muchos como una oportunidad para que el sistema de justicia demuestre que los procesos por violaciones graves a los derechos humanos pueden proceder libres de obstáculos procedimentales y sin interferencias políticas.

5. Desapariciones forzadas del pasado y desclasificación de archivos militares

49. El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas localizó los restos de personas que habrían desaparecido entre 1964 y 1982. En julio de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense emprendió la búsqueda de los restos de los guerrilleros de

⁶ Según la legislación boliviana, la rebeldía interrumpe la prescripción de la acción penal.

Teoponte reportados muertos por acción del Ejército en 1970. Hasta la fecha se encontraron restos de nueve personas, cuatro de las cuales fueron identificadas y entregadas a sus familiares.

50. El 20 de mayo, el Ministerio de Defensa aprobó la Resolución Ministerial 316 que autorizaría a las víctimas de la dictadura militar y a sus familiares el acceso a documentación de las Fuerzas Armadas de esa época. Los familiares de algunas víctimas observaron que la iniciativa era insuficiente y burocrática. La oficina en Bolivia considera esta norma como un paso importante en la lucha contra la impunidad, aunque el procedimiento que se establezca para acceder a los archivos militares y a la información clasificada determinará su eficiencia.

51. El 12 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra Bolivia⁷ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con las desapariciones forzadas de Rainer Ibsen y su padre José Luis Ibsen, en 1971 y 1973 respectivamente⁸.

52. El Estado boliviano empezó a cumplir las medidas de reparación de la sentencia de la Corte IDH en el caso de desaparición forzada de Renato Ticona Estrada en 1980⁹, realizando en septiembre de 2009 el pago indemnizatorio a los familiares de la víctima. Asimismo, la condena dictada por la justicia boliviana contra los acusados quedó firme y dos de ellos fueron encarcelados. Aún queda pendiente que el Estado localice los restos del Sr. Ticona Estrada y los entregue a sus familiares.

53. Pese a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso José Carlos Trujillo Oroza¹⁰, el 28 de septiembre la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz confirmó la sentencia de primera instancia a tres personas que en diciembre de 2008 un juzgado había pronunciado en relación con la desaparición forzada del Sr. Trujillo Oroza. El fallo confirmó la

⁷ Este es el tercer caso de desaparición forzada en Bolivia que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los otros casos, la Corte ya dictó sentencia (véanse notas 9 y 10 *infra*).

⁸ Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de Admisibilidad N.º 46/05, Petición N.º 786/03.

⁹ Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ticona Estrada y otros v. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C N.º 191.

¹⁰ En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia por la detención ilegal, torturas y desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza en 1972. Véase Corte IDH. Caso Trujillo Oroza v. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C N.º 64.

sentencia de dos años y ocho meses de presidio por el delito de privación de libertad, a pesar de que el caso concernía serias violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada y tortura.

6. Reparación a víctimas de violencia política

54. Continúa la persistente demora en la compensación de víctimas de la violencia política de los regímenes inconstitucionales (1964-1982) prevista en la Ley 2640 de 2004. Hasta mediados de 2009, el trabajo de calificación de expedientes por parte de la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (CONREVIP) no había concluido, pese al reclamo persistente de las víctimas. La Ley 4069, aprobada el 27 de julio, reemplazó a la CONREVIP por una Comisión Técnica de Calificación dependiente del Ministerio de Justicia y fijó el 31 de diciembre de 2009 como plazo final para expedir las resoluciones pendientes. Hasta finales de año, más de 1.500 solicitudes¹¹ quedaban pendientes de resolución en primera instancia. La Comisión no había empezado a evaluar ninguna de las reconsideraciones presentadas por los peticionarios.

55. La Ley 4069 no corrigió, sin embargo, los defectos mayores de la Ley 2640, como el hecho de que la financiación del 80% de los fondos para el resarcimiento deba obtenerse de capitales privados o de la cooperación internacional. Tampoco corrigió la falta de previsión de un pago anticipado a las víctimas que ya cuentan con resoluciones positivas. Estas omisiones provocaron la crítica de las asociaciones de víctimas.

56. Aunque al parecer la nueva comisión estaría trabajando con mayor celeridad y flexibilidad respecto a los requisitos procesales en el nivel de reconsideración, preocupa el muy bajo nivel de peticiones con resoluciones positivas. Según estimaciones, no es mayor al 3% del total de casos. En varias oportunidades, la oficina en Bolivia expresó ante las autoridades competentes su preocupación por la falta de resolución de estos casos.

¹¹ De las 6.221 solicitudes admisibles.

57. En diciembre de 2009, el Gobierno empezó a otorgar el pago único previsto en el Decreto Supremo 29884 a algunas de las víctimas de los sucesos de febrero, septiembre y octubre de 2003¹².

D. Seguridad y derechos humanos

1. Operativo policial para desarticular un presunto grupo terrorista

58. En la madrugada del 16 de abril de 2009 tuvo lugar un operativo policial en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, que resultó en la muerte de tres individuos extranjeros y la detención de otros dos. Según las autoridades, los cinco miembros formaban parte de un presunto grupo terrorista. El operativo estuvo dirigido a desarticular al grupo que, en la víspera, habría estado implicado en un atentado con explosivos contra la casa del Arzobispo de Santa Cruz, Cardenal Terrazas. El grupo también habría planeado asesinar al Presidente Morales y a otras autoridades del Gobierno, así como acciones tendientes a separar Santa Cruz de Bolivia. Los dos detenidos fueron trasladados a La Paz e imputados por terrorismo y otros delitos. Posteriormente, seis personas más fueron detenidas por su presunta vinculación con el grupo, mientras otras fueron imputadas como financiadoras. Todavía no se formularon acusaciones contra los imputados.

59. El 18 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el informe final de la Comisión Especial Multipartidaria establecida para investigar al presunto grupo terrorista. El informe concluyó que Eduardo Rózsa (una de las tres personas muertas en el operativo) y sus acólitos y financiadores habían planeado conformar un grupo paramilitar para fragmentar el territorio de Bolivia. El informe recomendó, *inter alia*, que el Ministerio Público investigue las conexiones financieras del grupo y a las personas relacionadas con él, incluyendo a las que habrían huido del país.

60. Basada en informes policiales y forenses, la Fiscalía señaló que las tres muertes ocurrieron en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, algunos sectores de oposición cuestionaron la actuación de la fuerza especial de la Policía durante el operativo, así como la investigación conducida por la Fiscalía. En particular, señalaron que las tres muertes fueron ejecuciones

¹² El Decreto Supremo 29884 reglamenta la Ley 3955 de 2008 que garantiza la reparación a las víctimas y familiares de los fallecidos y heridos durante los incidentes de 2003. Las reparaciones serían financiadas con recursos procedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Según información recabada por la oficina en Bolivia, los montos resarcibles ya se han determinado para los fallecidos y aquellos que sufrieron heridas levisimas. Las discusiones sobre los montos resarcibles de los heridos graves continuaban.

extrajudiciales. Si se confirma el uso indebido de la fuerza durante el operativo, los presuntos responsables deben ser sometidos a una investigación administrativa y, de ser necesario, a una investigación penal.

61. El tema sobre si el distrito judicial de Santa Cruz o el de La Paz tenían competencia territorial sobre la investigación fue intensamente debatido por todas las partes concernidas. El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 138 para establecer en la ciudad de La Paz la jurisdicción para el juzgamiento de casos de terrorismo, sedición y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Este decreto generó una fuerte crítica. La oficina en Bolivia considera que el decreto violaría el principio de reserva legal al regular materia de procedimiento penal.

62. El 29 de abril el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación solicitó al Gobierno boliviano y a los otros gobiernos de los ciudadanos involucrados en la supuesta conspiración, investigar a fondo el incidente y garantizar que los autores respondan por los delitos cometidos.

2. Uso excesivo de la fuerza

63. La oficina en Bolivia tomó nota, en particular, de tres casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad. El primero está relacionado con un operativo policial realizado en la madrugada del 18 de febrero en el marco de las investigaciones sobre los hechos de Pando, donde siete personas fueron aprehendidas y trasladadas a La Paz. Diferentes grados de violencia fueron supuestamente empleados durante las aprehensiones, las cuales se habrían efectuado sin la debida notificación y exhibición de los correspondientes mandamientos de aprehensión.

64. Los otros dos casos están relacionados con las aprehensiones efectuadas el 16 y 28 de abril, en conexión con el operativo en el hotel Las Américas. Los detenidos informaron a la oficina en Bolivia que fueron maltratados en el momento de la aprehensión y durante su traslado a La Paz.

3. Defensores de derechos humanos

65. En comparación con 2008, se reportaron pocos ataques físicos y amenazas contra defensores de derechos humanos. Algunos casos fueron reportados en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. De particular preocupación fue el ataque con arma de fuego en Trinidad, en el mes de febrero, contra un funcionario del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares en 2008, extendidas en 2009, para proteger al personal del CEJIS. Pese a ello, el CEJIS informó de que las autoridades aún no habían ejecutado ninguna medida para su protección.

66. A la oficina en Bolivia le preocupa el hecho de que anteriores ataques a defensores de derechos humanos no han sido investigados profunda y efectivamente.

4. Linchamientos

67. Al menos 71 casos de linchamiento o tentativa de linchamiento fueron reportados por la prensa, sobre todo contra sospechosos de haber cometido delitos comunes. Por lo menos se registraron 15 muertes. La mayoría de los casos reportados ocurrieron especialmente en zonas remotas de El Alto (La Paz), donde la presencia policial es limitada o inexistente. Algunas de las víctimas fueron quemadas vivas o golpeadas, atadas a piedras y tiradas al lago Titicaca. La oficina en Bolivia está preocupada por la violencia empleada y por el hecho de que el número de linchamientos se triplicó desde 2008¹³.

68. La Policía intervino en algunos de los casos para evitar la muerte de las víctimas de linchamiento. Sin embargo, en la mayoría, no se han realizado investigaciones ni se ha conducido a la justicia a los responsables. La oficina en Bolivia considera que la falta de investigaciones judiciales y la aparente tolerancia pública a este tipo de prácticas han contribuido al aumento de los linchamientos. Nada justifica la permisividad demostrada hacia este tipo de conductas delictivas que vulneran los principios más básicos de los derechos humanos.

E. Derechos políticos

¹³ Véase A/HRC/10/31/Ad.2, párrafo 45.

69. En 2009, los bolivianos ejercieron el derecho al voto en el referéndum constitucional del 25 de enero y en las elecciones generales del 6 de diciembre. Durante estos procesos, la oficina en Bolivia observó el respeto de las libertades de expresión y opinión, el derecho a la integridad y seguridad personales, y el derecho al voto. Otras organizaciones internacionales observaron los aspectos técnicos de las elecciones.

70. La oficina en Bolivia observó que, a pesar de unos cuantos incidentes aislados, los procesos electorales se llevaron a cabo sin perturbaciones, de manera pacífica y ordenada. Hubo alta participación ciudadana y respeto general a los derechos civiles y políticos.

71. Durante el proceso del referéndum constitucional, la oficina en Bolivia observó que ciertos grupos fueron impedidos por otros grupos contrarios de realizar su campaña en espacios públicos. De mayor preocupación fueron los actos de violencia e insultos racistas proferidos en Sucre contra los partidarios del *sí* por los partidarios del *no*.

72. Durante la campaña para las elecciones generales, la oficina observó al menos 14 incidentes de violencia e intolerancia política. De particular preocupación fueron los actos de violencia cometidos el 12 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz que dejaron cuando menos 10 personas heridas, especialmente simpatizantes del Movimiento al Socialismo, y causaron daños en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También fue preocupante el ataque ocurrido en Sucre contra una candidata a senadora del Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional.

F. Libertad de expresión y opinión

73. Las relaciones entre el Gobierno y los periodistas mejoraron en 2009. El Presidente Morales adoptó varias medidas para acercarse a los medios, como levantar el impedimento a los periodistas de los medios nacionales para que asistan a las conferencias de prensa del Gobierno. El Presidente también extendió una invitación a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para observar la situación de la libertad de expresión en el país. No obstante, hubo algunos incidentes entre el Gobierno y periodistas de medios privados.

74. Entre el 1º de enero y el 31 de octubre, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) registró 64 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas y medios de comunicación. La mayoría tuvo lugar en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. De particular preocupación para la oficina en Bolivia fueron las reiteradas amenazas e insultos del Alcalde de Santa Cruz hacia periodistas, a quienes, incluso, les deseó públicamente la muerte.

75. La oficina en Bolivia publicó un comunicado de prensa condenando el hecho de que dos periodistas de televisión de Santa Cruz, que cubrían un operativo policial el 3 de septiembre, fueran atacados por policías que emplearon armas letales. Los abusos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), grupo especial de la Policía que participó en el operativo, habrían sido la razón para que el Gobierno decidiera su disolución. La oficina en Bolivia saluda esta decisión y el inicio de investigaciones administrativas y penales al respecto.

76. También quedan pendientes de esclarecimiento varios casos de violencia ocurridos en Potosí, por ejemplo un ataque con explosivos a un canal de televisión el 8 de junio y ataques contra cuatro periodistas registrados entre el 26 y el 31 de agosto.

77. En 2008, la oficina en Bolivia había manifestado su preocupación por la falta de investigación y esclarecimiento judicial del asesinato, en mayo de 2008, de un periodista de la Radio Municipal de Pucarani¹⁴. La situación no ha cambiado. Es importante que las autoridades competentes investiguen seriamente éste y otros casos que ocurrieron en 2008.

78. En marzo de 2009, el Presidente Morales inició una causa penal por desacato contra el director del diario *La Prensa*, por artículos publicados en diciembre de 2008. Esto generó que las organizaciones de prensa protestaran por el uso de la figura de desacato y de la vía penal ordinaria, en lugar del procedimiento establecido en la Ley de Imprenta de 1925. Consiguientemente, los representantes legales del Presidente solicitaron al Ministerio Público modificar la calificación de desacato por la de difamación, injuria y calumnia, y tramitar el proceso ante un Tribunal de Imprenta. El juicio no se había iniciado hasta finales de año.

¹⁴ *Ibíd.*, párr. 66.

79. Al menos otras cinco denuncias por desacato fueron presentadas ante la justicia por autoridades públicas de distintos niveles. Cabe recordar que, desde hace más de una década, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) eliminar las leyes y tipos penales de desacato de sus ordenamientos jurídicos por ser restrictivos de la libertad de expresión. La oficina en Bolivia opina que Bolivia debe eliminar la persecución penal por esta figura pues afecta a la plena realización de la libertad de expresión y de prensa.

G. Derechos económicos, sociales y culturales

80. La nueva Constitución reconoce todos los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. Aunque Bolivia tiene un Plan Nacional de Desarrollo y a pesar del hecho de que los niveles de pobreza han caído significativamente en años recientes, éstos continúan siendo de los más altos de la región, con el 37,7% de la población viviendo en extrema pobreza en 2006¹⁵.

81. El país sigue sufriendo importantes desigualdades estructurales de largo plazo en cuanto a acceso y uso de servicios básicos. Esto afecta primeramente a las mujeres y a los pueblos indígenas de las áreas rurales. Sin embargo, hubo avances legislativos y el Gobierno estuvo implementando nuevos programas sociales dirigidos a grupos poblacionales específicos, como niños(as), madres, estudiantes y adultos mayores.

82. En particular, el Gobierno ha tomado medidas para mejorar el disfrute de los derechos a la alimentación, salud y educación. Con el objetivo de combatir la mortalidad materna e infantil, por ejemplo, aprobó el Decreto Supremo 115 de fomento a la lactancia materna y el Decreto Supremo 66 que establece el bono “Juana Azurduy” para las madres gestantes y las madres de niños(as) hasta los 2 años. El 12 de mayo, el Ministerio de Salud lanzó su Plan Estratégico Nacional (2009-2015)

¹⁵ Véase *Quinto Informe de Progreso sobre los objetivos de desarrollo del Milenio en Bolivia* (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas [UDAPE], 2008), pág. 27. Según últimas estimaciones de la UDAPE (citadas en E/2009/96, fig. 1), este nivel habría bajado al 31,8% en 2008.

para mejorar la salud materna, perinatal y neonatal. También fue positiva la continuación del Programa Desnutrición Cero para niños hasta los 2 años, que involucra una intervención multisectorial del Gobierno con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas.

83. Todas estas medidas constituyen pasos importantes hacia mejores niveles de nutrición y salud para hijos(as) y madres. Si bien se han dado algunos progresos, los índices bolivianos en mortalidad infantil y neonatal están todavía entre los más altos de Latinoamérica¹⁶.

84. La nueva Constitución establece la educación primaria y secundaria obligatoria y gratuita y la responsabilidad del gobierno de garantizar la educación para los niños con capacidades diferentes. Los avances alcanzados incluyen la continuación del bono “Juancito Pinto”, dirigido a fomentar la asistencia escolar y reducir los índices de deserción, y la creación del Programa Nacional de Post Alfabetización “Yo, sí puedo seguir”, establecido en febrero, dando continuidad al Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí Puedo”.

85. A pesar de estas medidas, hay una necesidad de seguir mejorando las condiciones de acceso y la calidad de la educación, especialmente en las áreas rurales. Los esfuerzos también son necesarios para adoptar una nueva ley de la educación. Un proyecto de ley ha estado en consideración del Órgano Legislativo durante los últimos tres años.

86. Con relación a los derechos laborales, entre las medidas positivas adoptadas por el Gobierno destacan la continuación del Programa Renta Dignidad para las personas mayores de 60 años y la adopción de decretos que aumentan el salario mínimo nacional en el sector privado, que fijan el pago de indemnizaciones a los trabajadores que han permanecido en sus puestos más de 90 días y que dificultan el despido de madres y padres trabajadores en el sector público y privado.

87. La existencia de distintas formas de trabajo infantil es particularmente preocupante. A pesar de que Bolivia tiene un Plan Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, se han hecho pocos progresos para erradicar las peores formas de explotación infantil. Según un informe del Fondo de

¹⁶ *Ibíd.*

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), unos 116.000 niños entre 7 y 13 años trabajan en sectores como la minería, la zafra de la caña de azúcar y la recolección de castaña¹⁷.

H. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos

88. Durante su primer año, el mecanismo de apoyo al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2009-2013 (PNADH)¹⁸ completó su organización interna. En mayo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, responsable de la implementación y supervisión del Plan, adoptó un reglamento interno sobre su estructura, atribuciones y funciones. El 10 de diciembre, en ceremonia pública, el Consejo fue oficialmente posesionado por el Vicepresidente. El Consejo está integrado por representantes de entidades estatales, ONG, sociedad civil y organizaciones indígenas. La oficina en Bolivia del Alto Comisionado participa como observador.

89. El Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales promovió el Plan en el país. Un avance inicial se dio en algunas áreas, como la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y la lucha contra la discriminación a través de la adopción de medidas legislativas y administrativas (ver secciones B y G *supra*).

90. No obstante, la implementación del Plan y asegurar su sostenibilidad representan un reto importante que requerirá asignaciones presupuestarias apropiadas y una verdadera coordinación entre las diferentes instituciones del Estado, así como una efectiva participación de la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil.

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

91. La oficina en Bolivia observó la situación de los derechos humanos en Bolivia e hizo seguimiento a casos emblemáticos de derechos humanos. Se puso particular atención a la situación de los derechos humanos durante el referéndum de enero y las elecciones de diciembre, y se emitieron comunicados de prensa acerca de varios temas observados en el curso del año.

¹⁷ Informe del UNICEF *Progreso para la Infancia: un balance sobre la protección de la niñez* (resumen informativo), septiembre de 2009.

¹⁸ El PNADH fue adoptado a través del Decreto Supremo 29851 de 10 de diciembre de 2008. Para mayor información, véase A/HRC/10/31/Add.2, párrs. 62 y 63.

92. La oficina en Bolivia difundió el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas en varias partes del país, particularmente a las comunidades y organizaciones indígenas. Autoridades y organizaciones relevantes también recibieron asesoría y capacitación sobre cómo dar seguimiento a las recomendaciones del indicado informe. La oficina también acompañó y asesoró al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su misión a la región del Chaco.

93. Se organizaron talleres sobre el derecho a la consulta con el sistema de las Naciones Unidas en Bolivia y autoridades de Gobierno; con el Ministerio de Autonomía se organizó un seminario internacional sobre autonomía indígena que contó con la participación de expertos internacionales y líderes indígenas; la oficina en Bolivia organizó igualmente una conferencia sobre pluralismo jurídico y derecho internacional de los derechos humanos con la participación de funcionarios de Gobierno, miembros de la judicatura, representantes de la sociedad civil y expertos nacionales e internacionales; también organizó una conferencia para difundir las buenas prácticas legislativas en torno al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar; y, junto a la Defensoría del Pueblo y la Comunidad de Derechos Humanos¹⁹, la oficina en Bolivia organizó un seminario sobre mecanismos e instrumentos para garantizar los derechos humanos en la implementación de la nueva Constitución.

94. Se brindó asistencia técnica al Ministerio de Justicia en la redacción del informe de Bolivia para la Conferencia de Examen de Durban. También se dio apoyo logístico a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil para su participación en la señalada conferencia; la Declaración y el Programa de Acción de Durban fueron ampliamente difundidos. La oficina en Bolivia también participó en reuniones de seguimiento con el Gobierno y la sociedad civil; realizó conferencias de prensa y publicó una selección de textos de las Naciones Unidas sobre lucha contra el racismo, discriminación racial, xenofobia y formas análogas de intolerancia. De igual modo se dio asesoramiento al Gobierno en la elaboración de su informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

¹⁹ Instancia de coordinación conformada por varias ONG de derechos humanos e instituciones estatales.

95. La oficina en Bolivia participó en seminarios organizados por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil que permitieron la creación de un comité técnico para evaluar las propuestas legislativas sobre lucha contra la discriminación y criminalización de la discriminación racial. Junto al Viceministerio de Descolonización, la oficina organizó un seminario internacional sobre políticas públicas contra el racismo y la discriminación. Se impartió capacitación al personal del mencionado Viceministerio sobre el marco legal de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el racismo, y se dio asesoramiento en la preparación de un diagnóstico sobre racismo y discriminación en Bolivia.

96. La oficina en Bolivia empezó a implementar un proyecto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación para crear capacidades y para la promoción de las organizaciones y comunidades afro bolivianas.

97. Se brindó asesoramiento al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil en la redacción de sus respectivos informes para el Examen Periódico Universal; en el marco del Examen Periódico Universal, la oficina en Bolivia también participó en los talleres de consulta nacionales organizados por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales; y en colaboración con las principales organizaciones de derechos humanos, organizó talleres en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija en relación con este mecanismo.

98. Con relación al Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, la oficina en Bolivia participó regularmente en las reuniones del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Junto al Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, organizó un taller sobre la implementación del Plan y publicó un folleto sobre el tema.

99. La oficina Bolivia publicó y difundió el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y las observaciones finales sobre Bolivia emitidas en 2008 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

100. La oficina en Bolivia expresó a funcionarios del Ministerio de Justicia sus observaciones y preocupaciones sobre el Decreto Supremo 138 relativo a reglas jurisdiccionales y adopción de medidas cautelares en casos de terrorismo.

101. La oficina en Bolivia dio capacitación sobre los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos a defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales e indígenas; también brindó asesoramiento a ONG de derechos humanos y peticionarios en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Beni.

102. En el marco de trabajo con el Equipo País de Naciones Unidas, la oficina en Bolivia organizó talleres sobre el enfoque de derechos humanos en la programación para el desarrollo y el EPU; participó regularmente en las actividades del Grupo Técnico de Género; y, junto al UNICEF, elaboró una publicación sobre derechos humanos y derechos del niño en ocasión del 61° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del 20° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

103. Comparado con 2008, en 2009 hubo una mejoría general de la situación de los derechos humanos, especialmente en relación con la disminución de las actividades de grupos de choque, que en 2008 habían afectado los derechos a la vida e integridad personal. Hubo menos violencia política, aunque la división política entre el Gobierno del estado Plurinacional de Bolivia y la oposición continuó a lo largo del año, con repercusiones sobre la situación de los derechos humanos. Este año los problemas que afectan al estado de derecho y al sistema de justicia se tornaron más agudos.

Recomendaciones

104. La Alta Comisionada reitera sus anteriores recomendaciones²⁰ y las de su oficina en Bolivia²¹. En particular, llama a las autoridades judiciales competentes a investigar e iniciar

²⁰ Véase A/HRC/10/31/Add.2, párrs. 89 a 102.

²¹ Véase, *Informe público de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008*, marzo de 2009, párrafos 110 a 112.

procesos en todos los casos de violaciones a los derechos humanos reportados en 2008, garantizando que las víctimas tengan acceso a una justicia independiente, imparcial y oportuna, y les sea asegurada una adecuada reparación, sobre todo con relación a los incidentes de mayo en Sucre y a la masacre de septiembre en Pando. Reitera su recomendación de investigar si las acciones realizadas por la Policía el 11 de septiembre en Pando, fueron las más apropiadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones a los derechos humanos y proteger a las víctimas. La Alta Comisionada formula las nuevas recomendaciones que figuran a continuación.

Legislación

105. La Alta Comisionada insta al desarrollo de legislación complementaria a la nueva Constitución que fortalezca el reconocimiento de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, de conformidad a los estándares internacionales.

Pueblos indígenas

106. La Alta Comisionada recomienda intensificar esfuerzos para implementar el derecho a la consulta de acuerdo a la nueva Constitución y llevar a cabo consultas y estudios de impacto ambiental en relación con proyectos extractivos y de desarrollo situados en las tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas.

107. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a continuar y reforzar las medidas dirigidas a la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, especialmente de aquellas condiciones a las cuales están sometidas las familias y comunidades guaraníes. Esto debe hacerse con la total participación de los líderes indígenas. El Gobierno también debe dar seguimiento a las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

Racismo, discriminación e intolerancia

108. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos encaminados a superar las manifestaciones y causas subyacentes del racismo y la discriminación, incluyendo

la realización de un adecuado diagnóstico de la situación y criminalizando el racismo y la discriminación.

Estado de derecho

109. **La Alta Comisionada insta a los órganos competentes a garantizar un procedimiento transparente para la designación de las nuevas autoridades judiciales de conformidad a la nueva Constitución. Hasta que estos procedimientos puedan ser establecidos y llevados adelante, debería lograrse un consenso político para llenar provisionalmente las vacantes judiciales, especialmente en el Tribunal Constitucional.**

110. **La Alta Comisionada recomienda reforzar el progreso alcanzado en la lucha contra la impunidad, respetando el debido proceso y garantizando el derecho a la verdad y una adecuada reparación para todas las víctimas de pasadas y recientes violaciones a los derechos humanos. Los resarcimientos previstos en la Ley 2640 deben ser pagados sin demora a las víctimas de la violencia política de los regímenes inconstitucionales entre 1964 y 1982.**

111. **La Alta Comisionada llama al Ministerio Público a investigar y llevar a la justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos reportadas, incluyendo los incidentes ocurridos durante las campañas electorales.**

Desapariciones forzadas

112. **La Alta Comisionada insta al Ministerio de Justicia a continuar con sus esfuerzos para localizar los restos de quienes fueron desaparecidos durante las dictaduras militares y entregarlos a sus familias, así como a garantizar que los archivos militares confidenciales del Estado, de la época dictatorial, sean efectivamente desclasificados.**

Seguridad y derechos humanos

113. **La Alta Comisionada insta a las autoridades bolivianas a investigar con imparcialidad las actividades y conexiones de los imputados en relación al supuesto grupo terrorista en Santa**

Cruz, y garantizar el derecho al debido proceso a los detenidos. Asimismo, solicita que las alegaciones sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, mencionadas en el presente informe, sean investigadas a fondo administrativa o penalmente, en caso necesario con el fin de determinar si la fuerza empleada fue necesaria, razonable y proporcional.

114. La Alta Comisionada recomienda al Gobierno adoptar un plan para prevenir y sancionar el linchamiento y tomar las medidas necesarias para garantizar que los casos de linchamiento sean oportunamente investigados y sus responsables sancionados.

Defensores de derechos humanos

115. La Alta Comisionada reitera su llamado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las judiciales, a garantizar que los defensores de derechos humanos gocen de total protección y que las violaciones cometidas en su contra sean oportuna y debidamente investigadas.

Libertad de expresión

116. La Alta Comisionada insta a las autoridades competentes a investigar las agresiones físicas contra periodistas, trabajadores de los medios y sus instalaciones, a efecto de que no queden en la impunidad, y a que adopten medidas adecuadas para prevenir efectivamente nuevos ataques; y llama al Gobierno así como a las autoridades departamentales y municipales a respetar y garantizar la libertad de expresión en todo momento.

117. La Alta Comisionada recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional eliminar el delito de desacato de la legislación penal boliviana.

Derechos económicos, sociales y culturales

118. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a continuar promoviendo programas sociales dirigidos a mejorar el acceso de la población a salud y educación, particularmente en áreas rurales.

119. **La Alta Comisionada llama a las autoridades, como asunto de urgencia, a poner fin al trabajo forzoso infantil.**

Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos

120. **La Alta Comisionada saluda las medidas adoptadas en el primer año de implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y llama al Estado a aprobar un presupuesto adecuado para su implementación y a una mayor coordinación y cooperación de sus entidades en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.**
